

Los observadores electorales como auxiliares en los procedimientos judiciales vinculados con los resultados de las elecciones

La celebración de comicios transparentes y creíbles es una de las pautas más importantes para calificar un sistema político-electoral como democrático. En ese marco, el derecho de observación electoral se inserta como un mecanismo que permite medir el logro de ese objetivo. Inclusive, la comunidad internacional lo ha reconocido como una práctica virtuosa en materia electoral. Así se desprende del *Código de Buenas Prácticas en Materia Electoral*, redactado por la Comisión de Venecia, la cual establece como deseable que: *los observadores nacionales como los internacionales tengan la posibilidad de desarrollar sus tareas de la forma más amplia posible, permitiéndoles determinar si ha habido irregularidades antes, durante y con posterioridad a las elecciones*¹.

En México, la regulación este derecho presenta inconsistencias que, desde mi punto de vista impiden que su ejercicio sea pleno en los términos apuntados por la Comisión de Venecia. En particular, me refiero al contenido del artículo 217, apartado 1, inciso j) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que dispone: ***En ningún caso, los informes, juicios opiniones o conclusiones de los observadores tendrán efectos jurídicos sobre el proceso electoral y sus resultados.*** La esencia de esta disposición se reproduce en los códigos o leyes de las entidades federativas.

Lo anterior significa que los hechos constatados por observadores electorales, aun los nacionales, quedan en meros recuerdos, pues no son susceptibles de ser presentados en juicio como elementos de validación de las elecciones. En esas condiciones surgen diversas interrogantes cuya respuesta no es satisfactoria para un contexto jurídico generalmente aceptado en el que se está por la maximización de los derechos. Si bien pudiera pensarse que ese mandato está diseñado para evitar intromisiones indebidas, me parece restrictivo del derecho individual de observación y del principio constitucional de certeza al que están sujetas las autoridades electorales, en particular sobre el resultado de las elecciones, al impedir que el juzgador cuente con medios demostrativos válidos, sujetos a ponderación que lo guíen en la decisión respecto de la validez y confiabilidad en el resultado de las elecciones. En este sentido, considero que las legislaciones no deben limitar *a priori* los alcances de los documentos que recogen la experiencia de los observadores electorales, máxime cuando gozan de inmediatez y pueden ser útiles para evaluar el resultado de una elección, desde luego siempre sujetas al recto raciocinio del juzgador.

El argumento no sólo tiene una base reflexiva sino que se fundamenta en la experiencia obtenida en el proceso electoral ordinario 2013 celebrado en la población rural de Huatlatlauca, Puebla, México. En ese caso, la votación recibida en dos casillas resultaba determinante para el resultado, pues se alegaba la existencia de violencia física y presión sobre los electores. El demandante acompañó como prueba de esos hechos, declaraciones rendidas por diversos ciudadanos ante el Presidente Auxiliar, que era la autoridad más cercana y diversos informes presentados por observadores electorales debidamente registrados ante el Instituto Electoral.

En la sentencia local, el Tribunal consideró que las declaraciones de los ciudadanos así como los reportes de los observadores constituían indicios que, valorados en su conjunto, generaban certeza sobre la existencia de conductas contrarias a la libertad de sufragio. En cambio, la instancia revisora disintió del criterio y estimó que de acuerdo a la legislación local los presidentes auxiliares carecían de atribuciones para levantar testimonios y que por ende la nulidad de la votación no podría sostenerse sólo con los informes de los observadores electorales, pues *su función no es la de hacer constar irregularidades o incidentes ocurridos en la jornada electoral en la que participan*².

Con independencia de lo razonable que puedan resultar los criterios, estimo que para el pleno ejercicio del derecho es necesario que se permita a los observadores electorales acercarse a las autoridades a través de reportes inmediatos e independientes de su informe final, para hacer de su conocimiento las anotaciones respecto a su experiencia en la elección, pues de muy poca utilidad serán las conclusiones adversas que se presenten cuando el resultado de los comicios haya sido validado.

Hoy en día no puede saberse si la comunidad a la que me he referido es gobernada por decisión de los ciudadanos o si sus autoridades fueron impuestas mediante la violencia, una ley general limitante de las buenas prácticas consideradas a nivel internacional y la falta de sensibilidad del juzgador de segunda instancia ante los incidentes reportados por los observadores electorales. Este riesgo es innecesario y puede evitarse permitiendo que el derecho de observación se ejerza sí bajo los parámetros legales con las adecuaciones que sean necesarias, pero con la perspectiva de maximización.

¹ Directriz II.3.2 del Código de Buenas Prácticas en Materia Electoral. Comisión Europea para la Democracia por el Derecho

² Cita obtenida de la página 23 de la sentencia federal.